CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
29 ABR. 2025
RECIBIDO
Firma: Hora: 5:09

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 7194/2023-CR y 7195/2023-CR; CON TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA LEY MARCO SOBRE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL.

COMISIÓN DE PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS Y AFROPERUANOS, AMBIENTE Y ECOLOGÍA

Período Anual de Sesiones 2024-2025

Señor Presidente:

Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, los siguientes Proyectos Legislativos:

i) **Proyecto de Ley 7194/2023-CR**[1]; Ley que Crea el Servicio de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, presentado en el Área de Trámite Documentario el 5 de marzo de 2024, a iniciativa del excongresista Jorge Enrique Meléndez Celis.

ii) **Proyecto de Ley 7195/2023-CR**[2]; Ley de Articulación de la Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social, Ciudadano e Indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, presentado en el Área de Trámite Documentario el 05 de marzo de 2024, a iniciativa de la excongresista María Elena Foronda Farro.

La iniciativa legislativa ingresó en atención del ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República.

Luego del análisis y debate correspondiente realizado de manera semipresencial bajo la Plataforma Microsoft Teams, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, en su Décima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 01 de abril de 2025, acordó por **MAYORÍA** de los presentes la **APROBACIÓN** del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 7194/2023-CR y 7195/2023-CR; con Texto Sustitutorio propone la Ley marco sobre vigilancia y monitoreo ambiental; con los votos favorables de los señores congresistas: Guillermo Bermejo Rojas, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Isaac Mita Alanoca, Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez, Luis Roberto Kamiche Morante,

[1] Ver contenido del Proyecto de Ley 7194/2023-CR, en el siguiente enlace (https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7194. (fecha de consulta 20/02/2025).
[2] Ver contenido del Proyecto de Ley 7195/2023-CR, en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7195 (fecha de consulta 20/02/2025).

María Elizabeth Taipe Coronado, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Silvana Emperatriz Robles Araujo y Ruth Luque Ibarra. Con los votos en contra de los señores congresistas: Mery Eliana Infantes Castañeda, Jeny Luz López Morales y Auristela Obando Morgan. Con los votos en abstención del señor congresista Edras Ricardo Medina Minaya.

Se deja constancia que en la sesión se aprobó por unanimidad el acta, con dispensa de su lectura para ejecutar los acuerdos.

I.SITUACIÓN PROCESAL

1.1 Antecedentes procedimentales

i) El Proyecto de ley 7194/2023-CR; tiene como antecedente al Proyecto de Ley 389/2016-CR, Ley que Crea el Servicio de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, el cual fue actualizado el 27 de febrero del 2024 por el Consejo Directivo de Congreso de la Republica a pedido del Grupo Parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú, en calidad de segunda comisión dictaminadora.

ii) El Proyecto de ley 7195/2021-CR; tiene como antecedente al Proyecto de Ley 389/2016-CR, Ley que Crea el Servicio de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, el cual fue actualizado el 27 de febrero del 2024 por el Consejo Directivo de Congreso de la Republica a pedido del Grupo Parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú, en calidad de segunda comisión dictaminadora.

1.2 Antecedentes legislativos

En el período parlamentario 2023-2024, se presentó el **Proyecto de ley 7194/2023-CR**, Ley que Crea el Servicio de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal y **Proyecto de ley 7195/2023-CR,** Ley de Articulación de la Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social, Ciudadano e Indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

II. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE LEY

2.1 Proyecto de ley 7194/2023-CR

Su texto normativo cuenta con seis (6) artículos y cuatro (4) disposición complementaria final, que proponen lo siguiente:

El artículo 1. Objetivo
Crear el Servicio de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, a fin de garantizar la participación de las comunidades campesinas y nativas, los pueblos

indígenas y los ciudadanos organizados, en el monitoreo, control y seguimiento de las obligaciones y compromisos ambientales y sociales en las actividades económicos extractivas y proyectos de inversión en infraestructuras, así como promover el diálogo sostenible entre el Estado, las poblaciones y la empresa.

El artículo 2. Ámbito de aplicación
Las actividades del servicio de vigilancia y monitoreo ambiental comunal, se realizan en el área de influencia donde se desarrollan las actividades económicas extractivas y proyectos de inversión en infraestructura, conforme a lo determinado en los instrumentos de evaluación del impacto ambiental, presentados ante las entidades públicas correspondientes.

El artículo 3. Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal
El Servicio de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, se realiza a través del Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, conformado por los representantes de las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas y los ciudadanos organizados, considerando el área de influencia y las particularidades de las actividades extractivas y los proyectos de infraestructura. Las áreas de influencia directa son aquellas localidades determinadas en los instrumentos de evaluación del impacto ambiental, para cada proyecto de inversión. El Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, cumple las siguientes funciones:

a) Constituir la personería jurídica correspondiente.
b) Aprobar del Plan de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Comunal.
c) Realizar la recolección, procesamiento y análisis de datos, a fin de identificar y registrar los cambios en algunos aspectos o elementos del entorno ambiental o social.
d) Coordinar con las diferentes entidades públicas y privadas involucradas en la ejecución de las actividades extractivas o proyectos de infraestructura que corresponda.
e) Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones de las entidades del gobierno, en sus niveles central, regional y local, así como de los titulares de las actividades económicas extractivas y los proyectos de inversión en infraestructura.
f) Participar en los procedimientos de evaluación, supervisión y fiscalización que comprenda el aprovechamiento de los recursos naturales.
g) Participar y facilitar los espacios de diálogo social convocados por las entidades públicas o privadas vinculadas con el desarrollo de las actividades extractivas o proyectos de infraestructura.
h) Acceder y generar información relacionada a la gestión de los compromisos

ambientales y sociales.
i) Elaborar el Informe Anual del Servicio de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, y presentarlo a las entidades públicas o privadas correspondientes.
j) Otros que establezca el reglamento de la presente Ley.

El artículo 4. Registro de los Comités
Los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, deben estar registrados en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA.
La OEFA administra, supervisa y actualiza la base de datos del registro de los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal.

El artículo 5. Publicidad de Información

Los planes, informes y documentos de las actividades realizadas por los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, deben ser incorporados al Sistema Nacional de Información Ambiental -SINI, a fin de facilitar el conocimiento de las incidencias, observaciones y recomendaciones por parte de las entidades públicas y privadas, así como el cumplimiento de las normas de transparencia y acceso acceso a la información pública.

.

El artículo 6. Financiamiento

La Formulación y ejecución de los Planes de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, realizados por los Comités, serán financiados por los titulares de las actividades económica extractivas o proyectos de inversión en infraestructura, en el cumplimento del principio de internalización de costo y de responsabilidad social ambiental, establecida en el articulo VIII. Del principio de internacionalización de costos, de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
Asimismo, los Comités podrán complementar la realización de sus actividades, con los aportes provenientes del Fondo Nacional del Ambiente - FONAM, las multas de los organismos reguladores o las contribuciones de terceros.
Para acceder a los mecanismos de financiamiento de los Planes de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, y actividades complementarias, estas deberán ser aprobadas por la OEFA.

Disposición Complementaria
La Primera Disposición Complementaria propone la modificación del artículo 4 de la Ley N° 26793, Ley de Creación del Fondo Nacional del Ambiente - FONAM, a fin de incorporar el literal g. en los siguientes términos:
"Articulo 4.-el FONAM, está a cargo de un Consejo Directivo integrado por:

g. Un representante de los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, debidamente registrado en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA".

La Segunda Disposición Complementaria, propone derogar o dejar sin efecto las normas que se opongan a lo establecido en la Ley.

La Tercera Disposición Complementaria dispone la reglamentación por el Poder Ejecutivo en un plazo de sesenta (60) días calendarios.

La Cuarta Disposición Complementaria señala que la propuesta entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

2.2 Proyecto de ley 7195/2023-CR

La fórmula normativa del Proyecto de Ley está compuesta por catorce (14) artículos, y dos (2) disposiciones Complementarias finales. Al respecto, las según lo siguiente:

El artículo 1. Señala que la presente ley tiene por objeto tiene por objeto institucionalizar y articular la vigilancia y el monitoreo ambiental y social que realizan la sociedad civil y los pueblos indígenas, a través de las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social (OVMAS) en el ámbito del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).

El artículo 2. Por su parte, indica que la ley tiene alcance nacional, siendo de aplicación en los diferentes niveles de gobierno a todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), comprendiendo su aplicación la acción de las organizaciones de la sociedad civil que desarrollan acciones de vigilancia y el monitoreo ambiental y social, incluyendo aquellas conformadas por los pueblos indígenas

El artículo 3. Contiene un glosario de nueve (9) definiciones.

El artículo 4, indica que las Organizaciones de Vigilancia y Monitores Ambiental y Social (OVMAS), están conformadas por personas naturales o jurídicas de la sociedad civil o de los pueblos indígenas y cómo se organizan.

El artículo 5. Su numeral 5.1, establece un listado de dieciséis (16) actividades que cumplirían estas OVMAS, organizaciones a las que se le reconoce autonomía.

Asimismo, su numeral 5.2, indica que las OVMAS cumplen un rol permanente de control y prevención frente a actividades y/o proyectos de inversión, u cualquier actividad que se desarrolle en sus tierras y territorios (...).

El artículo 6. Dispone la inscripción de estas organizaciones en el Ministerio del Ambiente (MINAM) y/o el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
para efectos de su reconocimiento.

El artículo 7. Indica que las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) promueven y garantizan el ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana así como la participación de los pueblos indígenas, involucrándolos en la planificación, y ejecución de las actividades de monitoreo, vigilancia, evaluación, supervisión y fiscalización de los componentes ambientales y sociales, de tal manera que estas organizaciones participen en la toma de decisiones y coadyuven en las acciones mencionadas.
El artículo 8. Establece que las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social (OVMAS) de la sociedad civil y de los pueblos indígenas se articulan en el desarrollo de sus actividades con las diferentes entidades integrantes del SNGA que en los diferentes niveles de gobierno ejercen competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así como dispone la obligatoriedad de que las entidades del SNGA respondan a los reportes y pedidos de las OVMAS en siete (07) días hábiles, salvo en inminente contaminación, en cuyo caso la respuesta será el mismo día de su presentación.
El artículo 9. Determina el contenido de los Reportes y denuncias de las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social
El artículo 10. establece la forma en que las entidades del Estado harán uso de los reportes de las OVMAS.
El artículo 11. Dispone el registro de los reportes de las OVMAS en el SNGA.
El artículo 12. Expone la función del SNGA de promover el fortalecimiento y articulación de las OVMAS.
El artículo 13. Dispone el acceso público de los reportes de las OVMAS.
El artículo 14. Establece que las entidades del SNGA financian a las OVMAS.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES,
La Primera, para indicar que la Ley se financia con cargo al presupuesto de las entidades públicas involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
La Segunda, para incorporar el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) al Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). Asimismo, modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, precisando que el Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre se incorpora

III. OPINIONES SOLICITADAS

3.1 Proyecto de ley 7194/2023-CR

Se solicitó opinión a las siguientes entidades:

a. **Ministerio de Energía y Minas- MINEM**, mediante Oficio 2332-2023-2024-CPAAAE/P-CR de fecha 12 de marzo de 2024.

b. **Ministerio de Economía y Finanzas,** mediante Oficio 2330 -2023-20224-CPAAAAE-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
c. **Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana- AIDESEP,** mediante Oficio 2334-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
d. **Presidente de la Confederación Campesino del Perú (CCP)**, mediante Oficio 2338-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
e. **Confederación Nacional Agraria (CNA),** mediante Oficio 2339-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
f. **Presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú CONAP,** mediante Oficio 2335-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
g. **Presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP**, mediante Oficio 2337-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
h. **Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego**, mediante Oficio 2331-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
i. **Ministro del Ambiente**, mediante Oficio 2329-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
j. **Presidente del Consejo Directivo de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA**, mediante Oficio 2333-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
k. **Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP,** mediante Oficio 2336-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.

3.2 Proyecto de ley 7195/2021-CR
Se solicitó opinión a las siguientes entidades:

a. **Presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú -CUNARC-P**, mediante Oficio 2347-2023-2024-CPAAAAE-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
b. **Ministerio de Energía y Minas- MINEM**, mediante Oficio 2343-2023-2024-CPAAAE/P-CR de fecha 12 de marzo de 2024.
c. **Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana- AIDESEP,** mediante Oficio 2344-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
d. **Presidente de la Confederación Campesino del Perú (CCP),** mediante Oficio 2349-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.

e. **Presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú CONAP,** mediante Oficio 2345-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
f. **Presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP**, mediante Oficio 2348-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
g. **Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego**, mediante Oficio 2342-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
h. **Ministro del Ambiente**, mediante Oficio 2340-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
i. **Presidente del Consejo Directivo de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA**, mediante Oficio 2341-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.
j. **Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP,** mediante Oficio 2346-2023-2024-CPAAAE/P-CR, de fecha 12 de marzo de 2024.

IV. OPINIONES RECIBIDAS

4.1 Proyecto de Ley 7194/2023-CR

4.1.1 Ministerio del Ambiente

Mediante Oficio 00539-2024-MINAM/SG, de fecha 17 de junio de 2024, dicho ministerio remite su opinión señalando que el proyecto de ley debe ser reevaluado para su la viabilidad.

4.1.2 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Mediante Oficio 1702-2024/MIDAGRI/SG, de fecha 2 de mayo de 2024, dicho ministerio señala que la iniciativa legislativa está relacionado con una materia que no se encuentra dentro de las competencias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y que forma parte de aquellas que el legislador ha asignado al Ministerio del Ambiente – MINAM y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA, tal como se han señalado en los informes de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios que es una unidad de organización de línea del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego encargada de atender los asuntos ambientales en la entidad.

4.1.3 Ministerio de Energía y Minas

Mediante Oficio 098-2024-MINEM/DM, de fecha 17 de mayo de 2024, dicho ministerio señala que la iniciativa legislativa no resulta viable debido que se encuentra regulado en la normativa ambiental especifica, como es el Subsector Hidrocarburos que cuenta con normativa específica que regula los mecanismos de participación ciudadana y participación de las comunidades a través de la vigilancia y monitoreo ambiental participativo y otros mecanismos establecidos.

4.2 Proyecto de Ley 7195/2023-CR

4.2.1 Ministerio de Ambiente

Mediante Oficio 00543-2024-MINAM/SG, recibido el 17 de junio de 2024, dicho sector nos remite su opinión señalando que se debe reevaluar la necesidad de la propuesta legislativa.

4.2.2 Ministerio de Energía y Minas

Mediante Oficio 192-2024, recibido el 03 de octubre de 2024, dicho sector nos remite su opinión señalando que no resulta viable, debido a que se encuentra regulado en la normativa ambiental especifica, como es el Subsector Hidrocarburos que cuenta con normativa específica que regula los mecanismos de participación ciudadana y participación de las comunidades a través de la vigilancia y monitoreo ambiental participativo y otros mecanismos establecidos.

4.2.3 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riesgo

Mediante Oficio 2414-2024-MIDAGRI/SG, recibido el 01 julio de 2024, dicho sector nos remite su opinión señalando que el proyecto no supera el análisis de viabilidad.

V. OPINIONES CIUDADANAS

5.1.1 Proyecto de ley 7194/2023-CR

Al momento de la elaboración del presente dictamen, no se ha identificado opiniones ciudadanas respecto del Proyecto de Ley 7194 /2023-CR; Ley que Crea el Servicio de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunal, en el Sistema de Proyectos de Ley de la página web del Congreso de la Republica [3]

[3] Ver contenido de la opinión ciudadana del Proyecto de Ley 7194/2023-CR, en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7194. (fecha de consulta 20/02/2025).

5.1.2 Proyecto de ley 7195/2023-CR

Al momento de la elaboración del presente dictamen, no se ha identificado opiniones ciudadanas respecto del Proyecto de Ley 7195 /2023-CR; ley de articulación de la vigilancia y monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena en el sistema nacional de gestión ambiental, en el Sistema de Proyectos de Ley de la página web del Congreso de la Republica [4].

VI. MARCO NORMATIVO

6.1 Constitución Política del Perú.

- Artículo 2, numeral 22, que reconoce el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
- Artículo 67 y 69, que establecen que el Estado promueve el uso sostenible de sus recursos naturales y el desarrollo sostenible de la Amazonía.
- Artículo 68 que establece la obligación del Estado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.
- Artículos de 88 que reconoce la propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal.
- Artículo 89 que reconoce que las Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas y autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras.
- Artículo 149 que reconoce el ejercicio de la función jurisdiccional de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas.

6.2 Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas.
6.3 Decreto Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva.
6.4 Ley 27908, Ley de Rondas Campesinas.
6.5 Ley 28736, Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial.
6.6 Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
6.7 Ley 26821, Ley General del Ambiente.

---

[4] Ver opiniones ciudadanas del Proyecto de Ley 1795/2023-CR, en el siguiente enlace: Ley de Articulación de la Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social, Ciudadano e Indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (fecha de consulta 20/02/2025).

6.8 Decreto Supremo 007-2008-MINAM, Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente-ROF del MINAM.
6.9 Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
6.10 Decreto Supremo 008-2005-PCM, aprueban Reglamento de la Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
6.11 Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA.
6.12 Decreto Legislativo 1078, Modificatoria de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental.
6.13 Decreto Supremo 019-2009-MINAM que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
6.14 Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
6.15 Resolución de Consejo Directivo 015-2012-OEFA/CD, que aprueba la Directiva 001- 2012-OEFA/CD, Directiva que promueve mayor transparencia respecto de la información que administra el Organismo de Evaluación Y Fiscalización Ambiental - OEFA.
6.16 Resolución de Consejo Directivo 032-2014-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento de participación ciudadana en las acciones de monitoreo ambiental a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
6.17 Ley 29785 Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
6.18 Decreto Supremo 001-2012-MC, Reglamento de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa
6.19 Ley 26505 de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional de las Comunidades Campesinas y Nativas
6.20 Decreto Ley 25891 que transfiere las funciones y actividades comprendidas en la Ley General de Comunidades Campesinas en la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de la Selva y Ceja de Selva.
6.21 Resolución Ministerial 159-2000-PROMUDEH que aprueban la Directiva para promover y asegurar el respeto a la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, Comunidades Campesinas y Nativas.

6.22 Decreto Supremo 152-2001-AG que declaran prioritaria y autorizan atención de solicitudes presentadas por las Comunidades Nativas de Selva y Ceja de Selva para aprovechamiento de recursos forestales en sus tierras.

6.23 Decreto Supremo 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales.

6.24 Decreto Supremo 002-2019-EM, que aprueba el Reglamento de participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos.

6.25 Decreto Supremo 028-2008-EM, que aprueba el Reglamento de Participación Ciudadana en el subsector minero.

6.26 Decreto Supremo 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

6.27 Ley 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú.

6.28 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes, aprobado por Resolución Legislativa 26253.

6.29 Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobada por Resolución Legislativa 26181.

6.30 Declaración sobre los derechos de pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas.

6.31 Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

6.32 Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 15 de noviembre de 2017, sobre medio ambiente y derechos humanos.

VII . ANALISIS DE LAS PROPUESTA LEGISLATIVA

7.1 Necesidad y viabilidad de las leyes propuestas

La CPAAAAE coincide con el espíritu de los proyectos legislativos que consideran que la inclusión y reconocimiento de los mecanismos de vigilancia y el monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena dentro del sistema nacional de gestión y fiscalización ambiental es un tema pendiente en el Perú, más aún si tenemos en cuenta que nuestro país se ha posicionado como el destino de inversiones en explotaciones de sus recursos naturales.

Estos factores han incidido sobre la necesidad de que se apruebe una ley que permita el reconocimiento de los sistemas ciudadanos e indígenas de alerta temprana y articulación al sistema nacional de gestión ambiental para una mejor gestión y prevención de desastres ambientales. El texto legislativo propuesto busca crear una figura de contrapeso en el actual escenario en que la institucionalidad de protección ambiental se ha visto debilitada ante numerosos y continuos desastres ambientales.

Conceptualmente, la vigilancia indígena "es una forma del control del territorio, la cual en la práctica ha tomado diversos nombres y se ha venido desarrollando con mucho esfuerzo por los pueblos indígenas conjuntamente con el incremento de las actividades extractivas en dichos espacios" y que consiste en mecanismos de control territorial que permiten conocer los desastres ambientales de primera mano, como un evento de daño a la salud, la cultura y el ambiente y a partir de ello, ejercer control territorial del desastre ocurrido en el pasado y en el presente y mientras se remedia, restaura o atiende los daños y los resultados de dicha atención. Quienes dan la primera alerta son las organizaciones y comunidades indígenas, por lo que el objeto del proyecto concuerda con la necesidad de los pueblos indígenas de que se reconozca su labor de vigilancia y que esta se articule con un sistema formal, como el Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

En el Perú, la vigilancia social, ciudadana e indígena ha tomado diversos nombres y se realiza sobre las diferentes acciones que se ejercen en cada uno de sus territorios. En la mayoría de los casos sus integrantes son nombrados por la comunidad y tienen una relación directa con sus organizaciones indígenas que son las que les proporcionan capacidades y articulan las acciones de vigilancia. Por ello, la articulación de la vigilancia social tendría que incluir a autoridades como el Gobierno Regional y demás niveles de gobierno local y nacional para que su participación sea legítima y sus aportes sean tomados en cuenta en todos los procesos legales, administrativos, etc.

Respecto a la participación ciudadana en el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental (SINEFA), la normativa vigente en el Perú ha reconocido el derecho a la participación de todos los ciudadanos sea o no comunal o indígena, sobre la base de la responsabilidad, buena fe, transparencia y veracidad, además de reconocer específicamente la participación y la vigilancia, a través de, entre otros mecanismos, monitoreo de la calidad ambiental, intervención de asociaciones de contribuyentes, usuarios y consumidores y de las rondas urbanas y/o campesinas (literal d del artículo 27° de la Ley N° 28245). Asimismo, el artículo 46° de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, señala que "Toda persona natural o jurídica, en forma individual o colectiva, puede presentar opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones u aportes, en los procesos de toma de decisiones de la gestión ambiental y en las políticas y

acciones que incidan sobre ella, así como en su posterior ejecución, seguimiento y control".

Por ello, el resultado más importante que se conseguiría con la aprobación del proyecto sería que, al insertar la vigilancia ciudadana e indígena al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la información que se recoja en vigilancia indígena o ciudadana sea aquella que pueda ser usada oficialmente por el Estado en procesos posteriores; sin que eso implique el reemplazo de organizaciones oficiales como la OEFA. Lo que se plantea es que las organizaciones indígenas y de la sociedad civil se integren al sistema de vigilancia para hacerlo más completo y eficiente.
Esta Comisión considera que el texto legislativo propuesto por el Proyecto No.7194/2023-CR puede servir como base para acumular a su contenido algunos aspectos de lo propuesto en el Proyecto No.7195/2023-CR, y que su exposición de motivos alude y cita información muy valiosa generada por fuentes primarias, por lo que en las páginas siguientes se reproducen la mayoría de sus fundamentos, acumulándolos con precisiones adicionales.

Origen participativo indígena de la iniciativa legislativa 7195/2023-CR
Como lo señala la exposición de motivos del Proyecto de Ley 7195/2023-CR, los pueblos indígenas y poblaciones locales ya vienen realizando labores de vigilancia y esta es de vital importancia sobre todo en zonas de nuestro país en las que muchas veces el Estado no está presente, por lo que este proyecto lo que hace es "recoger una labor que ya se viene realizando desde los pueblos indígenas y poblaciones locales, reconociéndola e institucionalizándola para permitirle aportar y mejorar la gestión territorial, ambiental y social en nuestro país".

A fin de proponer la iniciativa legislativa, los actores sociales que en la actualidad realizan dicha labor participaron en sendos talleres realizados en el Congreso de la República en los meses de mayo y octubre del año 2013, con presencia de dirigentes y Apus de comunidades campesinas y nativas y de representantes de organizaciones de la sociedad civil, universidades, etc., de diferentes regiones del país. Adicionalmente se realizaron dos reuniones de trabajo en julio de 2014 con representantes de empresas extractivas, por un lado, y de entidades de monitoreo del Poder Ejecutivo, por otro lado. Las experiencias y los aportes recogidos en estos eventos encaminaron la iniciativa legislativa hacia la incorporación y articulación de la Vigilancia y el Monitoreo Ambiental y Social en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental como el espacio idóneo para su institucionalización. Luego del trabajo de sistematización de los talleres y reuniones con los actores, se establecieron las líneas o áreas que abordarán la articulación del monitoreo y la vigilancia ciudadana e indígena con el sistema nacional de gestión ambiental:

- ✓ Reconocimiento estatal para visibilizar el aporte de las organizaciones ciudadanas y de los pueblos indígenas, y así profundizar las relaciones interculturales.
- ✓ Articulación entre las comunidades, las organizaciones representativas y los sistemas del Estado en los niveles local, regional y nacional.
- ✓ Valoración pública de la información producida.
- ✓ Utilidad para establecer una línea de base en instrumentos de gestión ambiental.
- ✓ Uso preventivo como alerta, y que contribuya y coadyuve en el trabajo de evaluación, supervisión y fiscalización realizado por las instituciones del Estado.
- ✓ Uso que garantice la participación permanente de los pueblos indígenas en las decisiones que los involucren.
- ✓ El Estado debe proveer las condiciones para promover la participación de las organizaciones ciudadanas y de los pueblos indígenas a través de recursos logísticos, fortalecimiento de capacidades, instrumentos y herramientas a partir de relaciones interculturales.
- ✓ El Estado debe promover la creación de una red nacional de monitoreo ambiental ciudadano y de pueblos indígenas que genere sinergias y fortalezca la institucionalidad ambiental existente.

El proyecto de Ley 7195-2023/CR materia del presente dictamen- fue sometido a la revisión de diferentes instituciones del Estado vinculadas a la gestión ambiental y a los derechos de los pueblos indígenas. En ocasión del debate de dicho proyecto se recibieron informes técnicos con conclusiones de 03 instituciones del Estado (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Riego y Ministerio de Ambiente) las cuales concluyen que la iniciativa legal resulta inviable, siendo solamente el Ministerio del Ambiente el que se expresara que debe revaluar la necesidad de la propuesta.

Asimismo, se precisó en la propuesta legislativa el reconocimiento de la vigilancia ambiental en su integralidad, es decir, no solo para la evaluación, supervisión o fiscalización y tampoco para una de las etapas de desarrollo de un proyecto de inversión, dado que la vigilancia se realiza las 24 horas y los 365 días del año. Se precisó además que el monitoreo ambiental ciudadano e indígena no busca reemplazar ninguna competencia, ni información generada por el Estado a través del sistema nacional de gestión ambiental sino complementar y fortalecer el trabajo que realiza el mismo; asimismo, que se busca incorporar la información de las

OVMAS en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental para contribuir a acelerar algunos procesos de reportes así como la elaboración de las líneas de base, estudios de impacto ambiental y reportes de supervisión, entre otros.

En la actualidad existen vacíos que conciernen a la participación intercultural en todos los ámbitos y etapas de fiscalización, de la población indígena, campesina y originaria peruana. Es por ello que la presente propuesta legislativa se permitirá generar coherencia en la labor de los diversos entes y establecerá una ruta razonable y proporcional de participación para fortalecer el eje estratégico de gobernanza ambiental, así como los mecanismos de transectorialidad del SNGA".

De lo señalado sobre el origen participativo de la iniciativa legislativa bajo estudio, tal como lo expresa su exposición de motivos, configura un cumplimiento exhaustivo del derecho a la participación de los pueblos indígenas en la elaboración de medidas que les afecten, consagrado en el Convenio 169 de la OIT.

Lo anteriormente señalado sobre el origen participativo de la iniciativa legislativa bajo estudio, tal como lo expresa su exposición de motivos, configura un cumplimiento exhaustivo del derecho a la participación de los pueblos indígenas en la elaboración de medidas que les afecten, consagrado en el Convenio 169 de la OIT.

Experiencias pre-existentes de monitoreo ambiental y social indígena y su importancia en la prevención de conflictos socio-ambientales y la preservación de derechos humanos

Como se refiere en la exposición de motivos, entre las experiencias que ya vienen desarrollándose de monitoreo ambiental y social indígena y ciudadano, una primera modalidad de monitoreo ambiental y social indígena es aquella en la que los dirigentes de comunidades y otros actores locales pueden participar voluntariamente en los llamados "Comités de Monitoreo Ambiental" creados por iniciativa de empresas extractivas, como los casos de las comunidades del área de influencia del proyecto Camisea en Quillabamba, Cusco, en el marco del Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario (PMAC) del Bajo y el Alto Urubamba. En estos espacios han estado participando las organizaciones indígenas de carácter regional como el Consejo Machiguenga del Rio Urubamba (COMARU), la Federación de Comunidades Nativas Yine Yami (FECONAYY) y la Central de Comunidades Nativas Machiguenga (CECONAMA).

La segunda modalidad, lo constituye el caso de los monitoreos realizados por entidades del Estado con participación de la sociedad civil, como un sistema de

monitoreo ambiental y de salud en el ámbito de la provincia, donde intervinieron conjuntamente con los representantes de las comunidades y sus organizaciones de grado superior. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta los antecedentes que muestran una vez más, que los monitoreos ciudadanos pueden contribuir, si son acogidos a tiempo por el Estado, a mejorar la gestión ambiental. En el año 2012 las comunidades campesinas y la población lograron hacer visibles los impactos de más de 30 años de actividad minera y evidenciaron la contaminación ambiental en el reporte "Monitoreo ambiental participativo-elaboración de una línea de base en el ámbito del proyecto Xstrata Tintaya" realizado el año 2011 en el marco del convenio de colaboración de la Vicaria de Sicuani y las comunidades campesinas del entorno del proyecto mencionado.

Una tercera modalidad es la constituida por los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Comunitario autónomos, conformados por monitores ambientales elegidos en asamblea de las comunidades nativas o campesinas. Este es el caso de las experiencias desarrolladas por la Federación de Indígenas Quechuas del Pastaza (FEDIQUEP), la Federación de Comunidades Nativas del Tigre (FECONAT), la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) en la vigilancia ambiental de la extracción de hidrocarburos en la región de Loreto y las veedurías forestales comunitarias en la región Ucayali y Madre de Dios, entre otras.

Con las experiencias autónomas y diversas sobre la vigilancia y monitoreo ambiental, también se ha logrado la articulación en acciones concretas entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas, antecedentes que demuestran no solo la necesidad de reconocer la labor de las poblaciones locales y pueblos indígenas en la vigilancia ambiental sino también el aporte que estas realizan a la gestión y fiscalización ambiental estatal. En este cometido la interiorización de las relaciones interculturales es una necesidad impostergable.

Los aportes del monitoreo ambiental comunitario muestran la importancia que su institucionalización tendría en la protección del medioambiente, la biodiversidad y de los territorios de los pueblos indígenas, dada la labor preventiva, de alerta y atención inmediata que desarrollan, fortaleciendo la evaluación, supervisión y fiscalización ambiental que realizan las entidades del Estado y generando a su vez un marco de estabilidad y predictibilidad para las inversiones.

De igual manera, debe recordarse que las comunidades campesinas y nativas ostentan naturaleza de derecho público interno en virtud de la ley que las reconoce,

así como los pueblos indígenas la tienen de derecho público internacional (al ser reconocidas por un tratado internacional como el Convenio 169 de la OIT el cual tiene rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico); por ende, no sería atendible el argumento por el cual ellas -o los organismos de monitoreo ambiental y social creados por ellas en ejercicio de su derecho a la autonomía-, no podrían beneficiarse de eventuales apoyos financieros de origen público, siendo que el mismo Convenio 169 de la OIT así lo estipula en su artículo 6o, inciso c).

De otro lado, debe subrayarse el espíritu de las iniciativas legislativas presentadas, tanto de las experiencias concretas ya existentes de monitoreo, en el sentido de que las OVMAs no tienen vocación de sustituir ni reemplazar a las entidades confirmantes del SNGA ni el rol rector del MINAM, dado que el texto normativo propuesto incide en articular las organizaciones autónomas ya existentes y vincularlas al SNGA, reconociendo las funciones complementarias y de alerta temprana que las OVMAs realizan.

Las acciones de vigilancia y monitoreo desarrollados por los pueblos indígenas y la sociedad civil se relacionan, aportan y coadyuvan a los sistemas de gestión, evaluación, supervisión, fiscalización e información ambiental. En el caso del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que desarrolla el ejercicio de las competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales, aportan en los procesos de elaboración y revisión de los ECA y LMP, además han aportado con información relevante al SINIA y al SINEFA en el proceso de evaluación y supervisión.

El texto sustitutorio también subraya la posibilidad de que la labor realizada por las OVMAS sea acompañada del soporte técnico correspondiente a fin de converger con los estándares y protocolos del MINAM en lo que corresponda, sin que ello perjudique la autonomía esencial de dichas experiencias organizativas de monitoreo.

Como indica la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, es la importancia y utilidad de la vigilancia y el monitoreo ambiental y social autónomos radican tanto en la acción preventiva, que apoya una adecuada gestión ambiental, como en la acción de alerta temprana a las autoridades informando y documentando la afectación (impacto) al patrimonio natural y a la vida y la salud de las personas, apoyando así las acciones de protección, remediación y compensación de los territorios y los ecosistemas, así como el respeto a los derechos y valores asociados, además del apoyo a las acciones de supervisión y fiscalización.
La acción documentada de las iniciativas de vigilancia y monitoreo ambiental y social han contribuido a mejorar la gestión ambiental, por lo que es necesario

institucionalizar la vigilancia ciudadana e indígena en materia ambiental y social y articularla eficazmente al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, para asegurar el ejercicio del derecho de la participación ciudadana y la participación indígena en la gestión ambiental así como en resguardo del patrimonio natural y cultural de la nación y de los derechos fundamentales y colectivos asociados.

Por otro lado, el Decreto Supremo 002-2009-MINAM, en su Artículo 36°, menciona la Vigilancia Ciudadana Ambiental e indica que las autoridades competentes son las encargadas de promover la participación ciudadana responsable en la fiscalización ambiental mediante acciones de vigilancia, con el fin de contribuir al mejor desempeño en el ejercicio de sus funciones. Además, agrega que las entidades (como el gobierno regional) deben implementar mecanismos de participación de la ciudadanía en la fiscalización ambiental. Esta vigilancia podrá verificarse a través de Comités de Vigilancia Ciudadana, agrupaciones formadas por personas naturales o jurídicas que tienen como objetivo contribuir en las tareas de fiscalización a cargo de la autoridad competente. Asimismo, pueden constituirse dichos Comités con fines de monitoreo y supervisión de obras que puedan causar impactos ambientales significativos. Los Comités de Vigilancia desarrollan sus actividades bajo los principios de responsabilidad y buena fe.

Si bien en la actualidad ya está en práctica la figura de vigilancia social, ciudadana, indígena, es necesario y oportuno que el valor creado a nivel local sea incorporado a sistemas nacionales, comenzando por niveles locales. Sumado a la eficiencia y eficacia en la atención de los problemas ambientales y sociales, es necesario fortalecer la participación ciudadana y la participación indígena, así como las relaciones interculturales en un proceso permanente de diálogo que permita fortalecer la institucionalidad ambiental.

Como es conocido y nos recuerda la exposición de motivos del proyecto de ley 7195-2023/CR, en septiembre del año 2014, se produjo el asesinato de cuatro dirigentes o Apus Asháninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto (Ucayali) en manos de madereros ilegales. Tales dirigentes realizaban labores de protección de sus territorios y habían solicitado con anticipación la titulación de sus tierras como un mecanismo de defensa legal y garantías para sus vidas. Sin embargo, no consiguieron a tiempo el apoyo del Estado. El caso citado ejemplificó cómo la titulación y el reconocimiento del monitoreo ambiental y social comunitario resultan imprescindibles para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, considerando su integridad cultural individual y colectiva, en particular para la implementación de

la participación y la realización de la consulta previa, así como la vida misma de las personas.

La vigilancia y el monitoreo ambiental comunitario permitirá a las comunidades disponer de información y mejores condiciones para la realización de sus planes de vida así como de sus planes de uso y ordenamiento del territorio y en el corto plazo se convertirá una herramienta eficaz para conseguir una apropiada remediación, compensación e indemnización, garantizar la disponibilidad de agua para consumo humano y dar soporte a los afectados por problemas de contaminación ambiental, los que continúan hasta hoy sin resolverse.

En el caso de los pueblos indígenas, además, la propuesta legislativa encuentra fundamento en los derechos de participación, autonomía, territorio, conservación y protección del ambiente conforme lo reconoce el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y demás instrumentos internacionales sobre la materia. Asimismo, en el principio 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Nuevo estado de la situación fáctica o jurídica luego de aprobada la ley propuesta

El efecto jurídico de la aprobación del texto legal propuesto consiste en institucionalizar la vigilancia y el monitoreo ambiental que ya realizan la sociedad civil y los pueblos indígenas a través de las Organizaciones de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social, así como fomentar el desarrollo de esta actividad en el ámbito del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

En este sentido la CPAAAAE acoge el PROYECTO LEGISLATIVO formulado en ambas iniciativas. Sin embargo, respondiendo a la orientación propositiva de las opiniones recibidas consideramos oportuno presentar algunos ajustes en un texto normativo sustitutorio, los cuales se mencionan a continuación.

Entre los principales cambios introducidos, se encuentra el objeto de la ley, que establece que se trata de una norma con la finalidad de implementar el derecho a la vigilancia y monitoreo ambiental, a fin de garantizar la protección del ambiente, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, el goce efectivo del derecho a la salud humana, y la participación con enfoque intercultural, como parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).

Otra modificación e inclusión importante son las disposiciones relativas a la transparencia activa en materia ambiental, a la luz de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre medio ambiente y derechos humanos.

Se han incorporado diversas disposiciones detallando el uso que pueden tener los Reportes y/o Actas de las OVMAs por parte de las entidades del Estado y otros terceros; así como las actividades que estas organizaciones pueden realizar como parte de sus labores de monitoreo y vigilancia.
Asimismo, se incorpora una disposición que deja en claro que las OVMA no sustituyen ni reemplaza en ningún modo las competencias de las entidades públicas, que fue una de las principales observaciones de sectores como el Ministerio de Agricultura y Riego.

Con relación al financiamiento, el presente dictamen dispone lo siguiente: La necesidad de que el Poder Ejecutivo promueva mecanismos financieros para garantizar la sostenibilidad de las acciones de control y vigilancia de las OVMAS.

En ese sentido, es clave que el Poder Ejecutivo impulse mecanismos financieros que permitan el ejercicio de las acciones de control, prevención, vigilancia y monitoreo ambiental. Además, la fórmula propuesta cumple con el artículo 79 de la Constitución, pues no crea ni aumenta gastos públicos, sino que deja en manos del Poder Ejecutivo la identificación, desarrollo e implementación de los mecanismos financieros que pudieran solventar las acciones de las OVMAS.

La posibilidad de que las OVMAS puedan ser financiadas con mecanismos existentes que nuestra legislación ya contempla, como es el caso de:

(a) Los aportes provenientes del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas (PROFONANPE), que es un fondo ambiental que financia, entre otras, acciones de control y vigilancia en áreas natrales protegidas.
(b) Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos regulados por la Ley 30215.
(c) Los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos regulados por el artículo 27° del Decreto Legislativo N° 1280, que posibilita la incorporación de estos mecanismos en las tarifas por servicios de saneamiento.
(d) Las contribuciones que los gobiernos regionales o locales establezcan en sus respectivas jurisdicciones, de conformidad con el artículo 74° de la

Constitución. Al respecto, debe mencionarse que estos tributos pueden ser aplicados para financiar acciones de control ambiental en cabeceras de cuenca que, a su vez, repercuten en la generación de beneficios diferenciales en favor de determinados sectores económicos, como la generación eléctrica.

Debemos mencionar que esta fórmula no afecta el artículo 79 de la Constitución, pues no crea ni aumenta gastos públicos. Por el contrario, solo visibiliza los mecanismos financieros ya existentes en favor de las diversas actividades ambientales, como la conservación de la biodiversidad. El objeto de esta propuesta es evitar que alguna imprecisión normativa obstaculice la aplicación de estos mecanismos financieros en favor de las OVMAS, habida cuenta de su decisivo trabajo en favor del medio ambiente.

VIII. ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO DE LA LEY PROPUESTA

La ley propuesta busca institucionalizar actividades que la sociedad civil y los pueblos indígenas organizados en comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas ya vienen realizando en nuestro país, y articularlas al Sistema Nacional de Gestión Ambiental que ya existe, por los que las modificaciones que se hagan en el ordenamiento jurídico nacional serán menores, sin embargo corresponderá a los diferentes niveles de la administración estatal, en especial a las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental adoptar las medidas que correspondan, siempre dentro del marco de sus funciones y competencias.

Asimismo, al tratarse de una ley marco, la misma servirá como guía para las entidades públicas, gobiernos regionales y locales en la elaboración normativa sobre la materia, estableciendo criterios mínimos que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a la vigilancia y monitoreo ambiental.

IX. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Bajo una lógica de lealtad con el Reglamento del Congreso de la República se presenta el análisis costo beneficio, expresado en una identificación de quienes resultan afectados positiva o negativamente con la norma propuesta (análisis costo oportunidad).

La aplicación de la Ley no implica mayores gastos al erario nacional, pues las funciones que se le encargan a los organismos del Sistema Nacional de Gestión

Ambiental se hacen dentro del marco de sus atribuciones por lo que no generan gasto ni implica modificación de las competencias de las entidades que conforman la administración estatal.

Por el contrario, la presente norma resulta beneficiosa para disminuir el alto número de conflictos socioambientales registrados a la fecha, pues permitirá que las organizaciones de la sociedad civiles y de los pueblos indígenas tengan mayor información y control sobre lo que ocurre en sus ámbitos territoriales, y que coordinen de manera institucionalizada con las entidades públicas, quienes en muchas ocasiones han perdido legitimidad por ser vistas como parcializadas con las empresas. Asimismo, esta ley permitirá ejercer de manera efectiva y concreta el derecho de participación y participación indígena contemplado en la Constitución Política y en diversos tratados sobre derechos humanos, coadyuvando al pleno desarrollo de las personas y de los pueblos.

X. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, recomienda, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la APROBACIÓN de los Proyectos de Ley 7194/2023-CR y 7195/2023-CR, con el siguiente con el siguiente Texto Sustitutorio:

TEXTO SUSTITUTORIO

LEY MARCO SOBRE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto establecer acciones y medidas para el ejercicio del derecho a la vigilancia y monitoreo ambiental por parte de los pueblos indígenas u originarios y la sociedad civil, a fin de garantizar la protección de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, el goce efectivo del derecho a la salud humana y la participación con enfoque intercultural, como parte del Sistema Nacional Gestión de Ambiental (SNGA).

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La presente ley se aplica a los diferentes niveles de gobierno y entidades que forman parte del SNGA y a otras que tengan competencias en la protección del ambiente, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y en materia de salud e interculturalidad.

Artículo 3. Reconocimiento de derecho a la vigilancia y monitoreo ambiental

Se reconoce el derecho a la vigilancia y monitoreo ambiental como parte del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, a la participación y, en el caso de los pueblos indígenas u originarios, como parte de su derecho a la autonomía y al territorio reconocidos por la Constitución Política del Perú y en tratados sobre derechos humanos en vigor.

Artículo 4. Definiciones

Para efectos de la presente ley, se establecen las siguientes definiciones:

a) **Organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental (OVMA).** Son organizaciones conformadas y constituidas por personas naturales o jurídicas de la sociedad civil o de los pueblos indígenas u originarios, que desarrollan actividades de vigilancia y monitoreo ambiental, de manera autónoma y, de ser necesario, en coordinación con las autoridades estatales. Su ámbito de acción es la zona de su lugar de residencia, su territorio o el ámbito geográfico donde desempeñan su objeto social; según corresponda.
b) **Vigilancia ambiental.** Es el proceso que permite observar, a modo de supervisión y prevención, las acciones directas o indirectas susceptibles de producir impactos ambientales en las tierras, territorios, hábitats, recursos naturales o diversidad biológica; así como los impactos sociales y culturales en la salud, y en la vida y dignidad de las personas.
c) **Monitoreo ambiental.** Es el proceso que permite medir, analizar e identificar la presencia y concentración de contaminantes en el ambiente, los recursos naturales, sedimentos, aguas subterráneas y la diversidad biológica; así como conocer el estado de su conversación. Este proceso puede llevarse a cabo de manera periódica.
d) **Plan de vigilancia y monitoreo ambiental.** Es el instrumento de planificación de las actividades de vigilancia y monitoreo ambiental a cargo de las OVMA, así como de otras acciones que se consideren necesarias para el desarrollo de estas.
e) **Pueblos indígenas u originarios.** Son colectivos considerados indígenas por habitar en el país o en una región geográfica que formaba parte de este en la época de la conquista o del establecimiento de las actuales fronteras. Independientemente de su situación jurídica,

conservan total o parcialmente sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. La conciencia de esta identidad es criterio fundamental para determinar su condición de pueblo indígena u originario. En esta categoría se incluye a las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas.

f) **Territorio de pueblos indígenas u originarios.** Es el espacio geográfico o hábitat ancestral tradicionalmente ocupado o utilizado de alguna otra manera por los pueblos indígenas u originarios, según lo establecido en el artículo 13.2 del Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

g) **Transparencia activa en materia ambiental.** Es la obligación de la Administración pública de suministrar de oficio al público la máxima cantidad de información completa, actualizada y en un lenguaje accesible, que resulte necesaria para que las personas puedan ejercer el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud y a un ambiente sano y equilibrado, en el marco de materia ambiental.

h) **Línea base.** Es el estado actual del área o territorio (medio físico, biológico y socioeconómico), previo a la ejecución de un proyecto, que incluye la descripción detallada de los atributos o características socioambientales de su área de emplazamiento.

i) **Indicador.** Es la variable específica de análisis especifica de un factor ambiental o social que es seleccionado para evaluar los impactos o realizar el monitoreo de estos en un determinado proyecto.

j) **Bioindicador.** Se refiere a la capacidad natural que tiene la biota para responder a los efectos de las perturbaciones eventuales o permanentes. Son las señales vivas que alertan sobre lo que está pasando en el ambiente y en los ecosistemas.

Artículo 5. Actividades a cargo de las organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental (OVMA)

5.1. Las organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental (OVMA) cumplen un rol permanente de protección del ambiente, la diversidad biológica, los servicios ecosistémicos y el goce efectivo del derecho a la salud humana, frente a impactos o riesgos de daños que se puedan generar producto de cualquier tipo de actividad humana. Su accionar se ejerce durante todas las etapas del desarrollo de dichas actividades, en concordancia con el principio

de prevención y precautorio para la mejora de las condiciones ambientales, sociales y culturales.

5.2. Las principales acciones que pueden realizar las OVMA, entre otras, son:

a) Labor de vigilancia y monitoreo ambiental, y actividades de investigación sobre el ámbito susceptible de ser impactado o de estar en riesgo por las actividades a las que hace referencia el inciso a) del artículo 4.
b) Participar en la elaboración de líneas base, protocolos e indicadores para la vigilancia y el monitoreo ambiental, así como en la elaboración de instrumentos de gestión ambiental.
c) Realizar el seguimiento del cumplimiento de las medidas adoptadas en los estudios de impacto ambiental (EIA).
d) Elaborar su plan de vigilancia y monitoreo, y la metodología del recojo de información.
e) Recoger, evaluar y analizar muestras, y otras evidencias que documenten los resultados de las actividades de monitoreo y vigilancia. Las muestras y evidencias son evaluadas y analizadas por laboratorios certificados, cuando corresponda.
f) Participar en las actividades de monitoreo, vigilancia, evaluación, supervisión y fiscalización ambiental de las entidades públicas correspondientes, que se lleven a cabo en el ámbito de su territorio o ámbito de acción.
g) Elaborar, analizar y difundir los resultados y las evidencias de vigilancia y monitoreo que realizan, así como su presentación a las autoridades correspondientes;
h) Participar en las acciones que se implementan frente a una declaratoria de emergencia ambiental, así como en el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos que se adoptados para su atención.
i) Participar en los procesos de planificación y ordenamiento territorial bajo el enfoque de cuencas hidrográficas, a fin de asegurar el bienestar de las comunidades y los pueblos indígenas u originarios, así como de la ciudadanía en general.
j) Participar en la elaboración de reportes, planes de gestión ambiental, planes de gestión de riesgos ambientales, sociales y culturales, entre otros instrumentos que consideren oportunos para la protección del ambiente, la diversidad biológica, los servicios ecosistémicos y el goce efectivo del derecho a la salud humana.
k) Elaborar y enviar reportes a las entidades competentes sobre incidentes ambientales ocurridos en el ámbito de su territorio o ámbito de acción, que pueden ser considerados como información base.

5.3. Las acciones de las OVMA toman en cuenta los instrumentos, los criterios técnicos y política ambiental aprobados por el Poder Ejecutivo para elaborar los instrumentos de gestión ambiental en lo pertinente, así como los conocimientos ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas u originarios.

5.4. Las acciones de las OVMA no sustituyen ni reemplazan de ningún modo las competencias que la Constitución Política del Perú y las leyes han otorgado a las entidades públicas referidas en el artículo 2.

Artículo 6. Registro nacional de las organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental (OVMA)

6.1. El Ministerio del Ambiente, en coordinación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, implementa, desarrolla y administra el registro nacional de las organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental (ROVMA). Las OVMA se inscriben en el referido registro, cuyo efecto inmediato es su reconocimiento por parte del Estado.

6.2. El ROVMA se rige por el procedimiento de aprobación automática establecido en el artículo 31 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El reglamento de la presente ley establece los requisitos y la documentación requerida para la inscripción en el referido registro, así como aquella información que permita identificar a los integrantes de las OVMA y su ámbito de acción.

6.3. La inscripción de las OVMA conformadas por pueblos indígenas u originarios en el ROVMA es de carácter declarativo y en ninguna circunstancia condiciona el ejercicio de los derechos reconocidos por los artículos 88, 89 y 149 de la Constitución Política del Perú, u otros reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y en los demás instrumentos internacionales.

6.4. Las OVMA pierden su inscripción en el ROVMA cuando contravienen lo dispuesto en la presente ley. El reglamento regula las causales de la pérdida de esta inscripción.

Artículo 7. Coordinación y cooperación entre las organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental (OVMA) y las entidades públicas

7.1. Las OVMA se articulan y coordinan, en el desarrollo de sus actividades, con las diferentes entidades integrantes del SNGA y otras que tengan competencias en la protección del ambiente, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y en materia de salud e interculturalidad.

7.2. Las OVMA son el primer nivel de alerta temprana para efectos de la evaluación, la supervisión y la fiscalización ambiental. Para este efecto, las entidades públicas correspondientes las incorporan en la ejecución de las actividades de monitoreo, vigilancia, evaluación y supervisión ambiental que llevan a cabo producto de dicha alerta.

7.3. Las entidades públicas correspondientes y las OVMA cooperan mutuamente para en el desarrollo de sus actividades y en el cumplimiento de sus fines, a fin de que puedan realizar dichas acciones de manera segura y eficaz.

7.4. En el caso de las OVMA conformadas por pueblos indígenas u originarios, la coordinación y cooperación se enmarca en lo establecido por los artículos 88, 89 y 149 de la Constitución Política del Perú, del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y en los demás instrumentos internacionales.

Artículo 8. Labores de vigilancia y monitoreo ambiental

8.1. Las OVMA pueden realizar sus labores de vigilancia y monitoreo ambiental de manera autónoma o de forma conjunta en coordinación con las entidades públicas pertinentes. En ambos casos, pueden recoger sus propias muestras u otras evidencias que den sustento a los resultados de tales actividades.

8.2. Cuando las OVMA contemplen visitas en áreas que son de propiedad del titular del proyecto de inversión o de un tercero, las labores de vigilancia y monitoreo requieren del acompañamiento de las entidades públicas correspondientes.

8.3. En el caso de las OVMA conformadas por pueblos indígenas u originarios que contemplen visitas en áreas que son de propiedad del titular del

proyecto de inversión o de un tercero, dichas visitas se llevan a cabo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7.4 del artículo 7. Cuando por razones de fuerza mayor la coordinación no sea posible, las OVMA presentan con posterioridad a la identidad competente y a la empresa un informe que detalle las acciones realizadas en su visita. El reglamento de la presente ley establece los supuestos que se consideren de fuerza mayor, así como los plazos y mecanismos de presentación del informe correspondiente.

8.4. Para las visitas referidas en los párrafos 8.2 y 8.3, con excepción del supuesto de imposibilidad por razones de fuerza mayor, las entidades competentes evalúan la solicitud de acompañamiento o coordinan con las OVMA conformadas por pueblos indígenas u originarios en un plazo idóneo que garantice el respeto de los principios de prevención y precautorio. Cuando las entidades públicas cuenten con planes de monitoreo ambiental, garantizan que en ellos se prevea el procedimiento para atender estas solicitudes y, de manera especial, aquellos casos en los que esté en riesgo inminente la vida, la integridad, la salud y el ambiente. El reglamento de la presente ley establece el plazo al que se refiere este párrafo.

8.5. El Ministerio del Ambiente, en coordinación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, implementa programas de capacitación sobre las labores de vigilancia y monitoreo ambiental a cargo de las OVMA, incluyendo las medidas de seguridad que deben seguir a efectos de proteger la vida, la integridad y la salud de las personas, así como el ambiente.

Artículo 9. Reportes o actas de las organizaciones de vigilancia y monitorea ambiental (OVMA)

9.1. Las OVMA pueden elaborar reportes o actas luego de cada diligencia que lleven a cabo en el marco de las actividades de vigilancia y monitoreo ambiental, donde consten los resultados de estas y, de ser el caso, las decisiones adoptadas o las recomendaciones al respecto.

9.2. Los reportes o actas de las OVMA indican, como mínimo, la fecha, hora y lugar en que se realizó la labor de vigilancia o monitoreo; el ámbito geográfico en que se realizó; las personas, comunidades, pueblos, autoridades indígenas o autoridades estatales que participaron en dicha diligencia; las firmas y los números de documento nacional de identidad de los participantes, en caso corresponda; así como los resultados de estas

actividades. En caso de que contengan la denuncia de algún hecho, se deben adjuntar medios probatorios idóneos sobre este.

Artículo 10. Uso de los reportes o actas de las organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental (OVMA) por las entidades del Estado y terceros

10.1. Las OVMA remiten sus reportes o actas a las entidades públicas correspondientes como al Ministerio del Ambiente y sus órganos adscritos, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Producción, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, entre otras que entidades que conformen el SNGA, así como a aquellas instituciones que tengan competencia técnica para la evaluación de la información contenida en los referidos reportes o actas. Estos son merituados y valorados por dichas entidades en los procedimientos administrativos de su competencia, ya sea que coincidan o no con los resultados con los que estas entidades cuentan; y, cuando corresponda, actúan de oficio según la información proporcionada.

10.2. Los reportes o actas de las OVMA son considerados documentos de referencia, como herramientas preventivas, que ayudan al monitoreo ambiental a través de la identificación de los componentes físicos, químicos, biológicos, microbiológicos, socioeconómicos, culturales y ambientales de un ámbito territorial, entre otros, en:

a) El procedimiento de evaluación del impacto ambiental de los proyectos de inversión, a partir de los términos de referencia;
b) La línea base para la medición del estado de calidad del ambiente, del aire, los suelos, el agua; la biodiversidad y la situación de ecosistemas, entre otros;
c) La elaboración del Informe sobre el Estado de Calidad Ambiental del aire, los suelos y las aguas;
d) Las etapas de elaboración de los instrumentos de gestión ambiental, de gestión de riesgos ambientales, planes de remediación, y de ordenamiento territorial.

10.3. Las entidades públicas que reciben los reportes o actas de las OVMA informan a estas, en un plazo de quince días hábiles, sobre las acciones y medidas que han de adoptar luego de haber evaluado el contenido de dichos documentos y, cuando corresponda, los plazos previstos para su

ejecución. En el caso de que los reportes o actas sean de alerta temprana por situaciones de inminente contaminación u otro tipo de afectación a la vida, a la integridad y a la salud humana, el plazo para que la entidad pública alcance dicha información a la OVMA es de diez días hábiles. Frente al incumplimiento de las disposiciones del presente párrafo, se aplica lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

10.4. El Ministerio del Ambiente incorpora los reportes o actas que le sean remitidos al Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), para su difusión y publicidad, en el marco de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en el marco de su suscripción de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Artículo 11. Función promotora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA)

11.1. Las entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) promueven el fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras de las organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental (OVMA).

11.2. El SNGA impulsa la articulación entre las diversas OVMA de todos los niveles del Estado para el intercambio de experiencias y conocimientos. La planificación de estas actividades se realiza en coordinación entre las entidades del SNGA y las OVMA. En el caso de las OVMA conformadas por pueblos indígenas u originarios, la planificación considera el uso de sus propias metodologías y conocimientos tradicionales.

11.3. El Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector del SNGA, promueve y coordina el cumplimiento de esta función promotora a través de las entidades integrantes que lo integran.

Artículo 12. Transparencia activa en materia ambiental

12.1. Todas las entidades de la Administración pública cumplen con el mandato de transparencia activa en materia ambiental y se encuentran obligadas a priorizar la efectividad de los principios de máxima publicidad, divulgación y "pro homine", cuando la información solicitada sea determinante para el ejercicio y goce efectivo del derecho a la vida y la salud.

12.2. En caso de emergencia ambiental o de riesgo inminente al ambiente, a la vida, a la integridad y a la salud humana, la difusión y la entrega de la información relevante e idónea son inmediatas. En estos supuestos, el plazo máximo para atender las solicitudes de acceso a la información pública es de dos días hábiles, pudiendo la Administración pública dar respuesta de manera electrónica. El reglamento establece el procedimiento especial de solicitud de acceso a la información pública para estos casos, tomando en cuenta su particularidad y los principios de prevención y precautorio.

12.3. La obligación de transparencia activa en el aprovechamiento de los recursos naturales implica el deber de la entidad pública competente de suministrar, de oficio, la información relacionada con las solicitudes o petitorios de los títulos habilitantes respectivos, a la personas o pueblo indígena u originario, comunidad campesina, comunidad nativa o ronda campesina cuyas tierras o territorios se vean superpuestos a dichos títulos. En ninguna circunstancia, la entrega de dicha información reemplaza el deber del Estado de realizar la consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Los costos de reproducción de la información y otros que se generen en el marco de este párrafo son asumidos por el administrado que presenta la solicitud o el petitorio del título habilitante.

12.4. Las personas y los pueblos indígenas u originarios que hablan un idioma originario distinto al español tienen derecho a recibir la información pertinente tanto en español como en su lengua indígena u originaria.

Artículo 13. Financiamiento de las organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental (OVMA)

13.1. El Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales promueven mecanismos financieros para garantizar la sostenibilidad de las actividades de las OVMA.

13.2. Las actividades de las OVMA pueden financiarse con los con los aportes provenientes del Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE); con los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos regulados por la Ley 30215, Ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos; y por el artículo 27 del Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley marco de la

gestión y prestación de los servicios de saneamiento; así como con las contribuciones que los gobiernos regionales o los gobiernos locales establezcan en sus respectivas jurisdicciones, entre otros mecanismos financieros, de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política del Perú.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Financiamiento
La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

SEGUNDA. Reglamentación
El reglamento de la presente ley se somete al proceso de consulta previa, libre e informada establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y es aprobado mediante decreto supremo refrendado por el ministro del Ambiente en un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley.

TERCERA. Fondos públicos
El Poder Ejecutivo incorpora criterios de naturaleza ambiental en los fondos públicos concursables que se encuentren en el ámbito de sus competencias en un plazo no mayor a ciento veinte días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

CUARTA. Principio "pro homine"
La aplicación de la presente ley no menoscaba el goce o ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido a los pueblos indígenas u originarios y la ciudadanía en general en otras leyes, tratados o instrumentos internacionales.

QUINTA. Vigilancia y monitoreo ambiental indígena u originaria, y ciudadana durante una emergencia sanitaria

El derecho a la vigilancia y monitoreo ambiental por parte de los pueblos indígenas u originarios y la sociedad civil no se suspende ante una emergencia sanitaria.
Cuando el Estado se vea imposibilitado de realizar sus acciones de fiscalización ambiental, puede solicitar a las OVMA su apoyo para el desempeño de esta

labor, en el marco de las acciones establecidas en la presente ley. En ese supuesto, el Estado les proporciona los recursos logísticos necesarios para que las actividades de vigilancia y monitoreo se lleven a cabo garantizando el derecho a la salud y la integridad de las personas que conforman las OVMA.

SEXTA. Adecuación de la normativa sectorial

Los reglamentos de participación ciudadana de los distintos sectores del Poder Ejecutivo, relacionados con la materia prevista en el artículo 1 de la presente ley, se adecúan a esta.

Dese cuenta
Semi Presencial – Plataforma Microsoft Teams.
Lima, 01 de abril de 2025.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BERMEJO ROJAS Guillermo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/04/2025 12:00:50-0500

GUILLERMO BERMEJO ROJAS
Presidente

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: QUITO SARMIENTO Bernardo Jaime FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/04/2025 17:00:41-0500

BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO
Vicepresidente

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MITA ALANOCA Isaac FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/04/2025 16:34:15-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MITA ALANOCA Isaac FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/04/2025 16:24:33-0500

ISAAC MITA ALANOCA
Secretario

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 7194/2023-CR y 7195/2023-CR; CON TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA LEY MARCO SOBRE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL.

ARTURO ALEGRÍA GARCÍA
MIEMBRO TITULAR

MERY ELIANA INFANTES CASTAÑEDA
MIEMBRO TITULAR

JENY LUZ LÓPEZ MORALES
MIEMBRO TITULAR

AURISTELA OBANDO MORGAN
MIEMBRO TITULAR

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RUIZ RODRIGUEZ Magaly Rosmery FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/04/2025 18:31:06-0500

MAGALY ROSMERY RUÍZ RODRÍGUEZ
MIEMBRO TITULAR

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: KAMICHE MORANTE Luis Roberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/04/2025 11:54:05-0500

LUIS ROBERTO KAMICHE MORANTE
MIEMBRO TITULAR

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TAIPE CORONADO Maria Elizabeth FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/04/2025 12:17:33-0500

MARÍA ELIZABETH TAIPE CORONADO
MIEMBRO TITULAR

EDRAS RICARDO MEDINA MINAYA
MIEMBRO TITULAR

DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 7194/2023-CR y 7195/2023-CR; CON TEXTO SUSTITUTORIO PROPONE LA LEY MARCO SOBRE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VERGARA MENDOZA Elvis Hernan FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/04/2025 15:58:25-0500

ELVIS HERNÁN VERGARA MENDOZA
MIEMBRO TITULAR

KAROL IVETT PAREDES FONSECA
MIEMBRO TITULAR

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ROBLES ARAUJO Silvana Emperatriz FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/04/2025 10:57:38-0500

SILVANA EMPERATRIZ ROBLES ARAUJO
MIEMBRO TITULAR

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LUQUE IBARRA Ruth FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/04/2025 20:42:25-0500

RUTH LUQUE IBARRA
MIEMBRO TITULAR

ELÌAS MARCIAL VARAS MELÉNDEZ
MIEMBRO TITULAR

INTEGRANTES ACCESITARIOS

EDUARDO ENRIQUE CASTILLO RIVAS
MIEMBRO ACCESITARIO

NILZA CHACÓN TRUJILLO
MIEMBRO ACCESITARIO

VÍCTOR SEFERINO FLORES RUÍZ
MIEMBRO ACCESITARIO

DAVID JULIO JIMÉNEZ HEREDIA
MIEMBRO ACCESITARIO

CARMEN PATRICIA JUÁREZ GALLEGOS
MIEMBRO ACCESITARIO

MARTHA LUPE MOYANO DELGADO
MIEMBRO ACCESITARIO

CÉSAR MANUEL REVILLA VILLANUEVA
MIEMBRO ACCESITARIO

FLAVIO CRUZ MAMANI
MIEMBRO ACCESITARIO

ROBERTO HELBERT SÁNCHEZ PALOMINO
MIEMBRO ACCESITARIO

JOSÉ ENRIQUE JERI ORÉ
MIEMBRO ACCESITARIO

HÉCTOR VALER PINTO
MIEMBRO ACCESITARIO

JOSÉ BERNARDO PAZO NUNURA
MIEMBRO ACCESITARIO

LUIS GUSTAVO CORDERO JON TAY
MIEMBRO ACCESITARIO

JORGE ALBERTO FIGARI MORANTE
MIEMBRO ACCESITARIO

ALFREDO AZURÍN LOAYZA
MIEMBRO ACCESITARIO